



NPR		91-12
Fecha sentencia		13/04/2015
Materia Ética		Confidencialidad y secreto profesional; Criterio de prevención; Conflicto con el interés de un cliente anterior.
Disposiciones infraccionadas	Según O. Instructor	Artículos 7°, 22° y 85° del Código de Ética Profesional de 2011
	Según Tribunal de Ética	Artículos 7° y 85° del Código de Ética Profesional de 2011
El Tribunal resuelve		Sancionar con amonestación por escrito con publicidad.
Conclusiones Relevantes del Fallo		<p>1. La confidencialidad debida se extiende a toda la información relativa a los asuntos del cliente que el abogado ha conocido en el ejercicio de su profesión.</p> <p>2. El abogado no puede intervenir en un asunto en favor de los intereses de un cliente, si éstos, son directamente adversos a los intereses de otro cliente anterior del mismo abogado o del estudio profesional y existe además el riesgo de que la confidencialidad de las informaciones obtenidas del anterior cliente pueda ser infringida; o tales informaciones pudieren permitir al nuevo cliente la obtención de una ventaja indebida.</p>

FALLO N.P.R. 91/12

Vistos oídos los intervinientes y considerando:

- 1) Que con fecha 31 de marzo de 2015, a las 15:30 horas, ante ésta Sala de Tribunal de Ética, constituido en las oficinas del Colegio de Abogados de Chile AG., ubicadas en Ahumada N° 341, oficina 207, comuna de Santiago, tuvo lugar la audiencia de juicio ético fijada en autos. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Sres. Cristian Maturana M., Presidente, Gerardo Varela A., y doña Ma. Gabriela Zúñiga C. Sostuvo la acusación la abogada Instructora Sra. Paulina Rebolledo Donoso, con domicilio registrado en el Colegio de Abogados de Chile, AG. La reclamante XX, compareció personalmente y asistida por su abogado Sr. Roberto González M. La audiencia se llevó a efecto sin la presencia del abogado reclamado don XX, quien no obstante fue debidamente notificado, dándose lectura al escrito de descargos formulados.



- 2) Que en la audiencia la abogado instructora sostuvo ante el Tribunal la existencia de la investigación NPR 91/12 caratulada XX CON XX, describiendo que la misma se cerró el 13 de mayo de 2014 resolviendo formular cargos en contra del abogado colegiado, registro XX, don XX, cédula de identidad XX, con domicilio en Tarapacá, comuna de Santiago.
- 3) Expone que a principios del año 2012, doña XX, contrató los servicios profesionales del Sr. XX, para deducir una querella criminal, al haber sido ella víctima de una estafa que le habría causado un perjuicio que ascendía a la suma de \$6.000.000.- (seis millones de pesos). Los honorarios de ese encargo profesional se fijaron en la suma de \$ 400.000.- (cuatrocientos mil pesos) de los cuales se habrían alcanzado a pagar \$270.000.- (doscientos setenta mil pesos). Según relato de la reclamante el 03 de abril de 2012, se presentó querella ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y le consta que el 21 de Junio de 2012, el abogado reclamado renunció al patrocinio y poder. Es del caso que, con fecha 23 de julio de 2012 el mismo abogado reclamado esta vez en sede laboral, asumió la representación de doña XX, en contra de doña XX, su anterior representada, por reclamaciones laborales diversas. Esta representación profesional se materializó en sendas actuaciones del 23 de julio de 2012, en que patrocinó a la Sra. XX en un comparendo de conciliación, ante la Dirección del Trabajo y posteriormente, el 22 de Agosto de 2012, en el juicio laboral propiamente.
- 4) A juicio de la instructora los hechos descritos configurarían las infracciones a los artículos 7º, 22º y 85º del Código de Ética Profesional de 2011, que resulta aplicable, en tanto cuerpo normativo vigente a la época de comisión de las mismas. Las infracciones descritas fueron cometidas por el abogado Reclamado, en calidad de autor *“y por la responsabilidad que le cabe por no haber aplicado el criterio de la prevención, y haber intervenido en un asunto en favor de los intereses de un cliente cuando ellos eran directamente adversos a los intereses de una cliente suya anterior, suscitándose un conflicto de intereses”*.
- 5) El Tribunal procede a dar la palabra a la reclamante quien en términos generales reitera lo expuesto por la instructora, destacando su condición de extranjera, falta de conocimiento en las disposiciones legales y cómo contactó al abogado en quien depositó su confianza al informarle cabalmente sobre sus negocios y las modalidades del mismo así como las personas que servirían de testigos de la estafa de la que había sido víctima por parte de otros extranjeros.



Se le concede la palabra al abogado Roberto González M., quien expresa que tomó conocimiento de los hechos por haber asistido a la reclamante que en su condición de extranjera y con escasa preparación, la que le consta ha sido afectada por el actuar del abogado reclamado al presenciar las actuaciones de aquél, cuando obró como representante de la Sra. XX .

Previo a la rendición de la prueba se formulan consultas a la instructora para precisar las fechas y a la reclamante para precisar sus dichos y su relación con doña XX.

- 6) Oídos los intervinientes, el Tribunal pasa a recibir la prueba ofrecida: **1.** Contrato celebrado entre Doña XX y Don XX, para interponer una querella criminal por estafa y hurto, sin fecha. **2.** Registro y seguimiento de la causa RIT XX-2012, RUC XX-4, sobre ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES CONTRA PARTICULARES, caratulada “XX con XX Y OTROS”. **3.** Copia querella criminal por el delito de estafa y hurto, presentada con cargo de 03 de abril de 2012, ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. **4.** Escrito de renuncia de patrocinio y poder presentado por don XX, de 21 de Junio de 2012, en causa RIT XX-2012, RUC XX-4. **5.** Acta de Conciliación, ante la Dirección del Trabajo, Centro de Conciliación Región Metropolitana de 23 de julio de 2012. Reclamo Nº XX. **6.** Causa Laboral RITT-XX-2012, RUC XX-8, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, procedimiento Tutela caratulada “XX con XX”. **7.** Registro página Web del Poder Judicial, Causa RIT J-XX-2012, RUC XX-K del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. **8.** Cuenta de pago judicial de 05 de julio de 2013, otorgado en la Notaría de doña Elba Sanhueza Muñoz. **9.** Resolución de 18 de octubre de 2013, causa RIT J-XX-2012, RUC XX-K del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. **10.** Correos electrónicos de 26 de Julio de 2012. **11.** Carta de descargos del abogado reclamado.
- 7) Concluida la prueba el Tribunal invita a los intervinientes a formular sus consideraciones de clausura, las que se omiten por coincidir en lo sustancial con las peticiones ya expuestas. La abogada instructora refiere que el abogado Reclamado, no registra reclamos anteriores pendientes, ni sanciones anteriores impuestas por el Colegio de Abogados.
- 8) Considerando la prueba rendida, especialmente la documental signada con los números 1º contrato de prestación de servicios profesionales, 2º registro impreso del seguimiento de la causa criminal y 3º, querella criminal deducida, en opinión de este Tribunal se acredita y sostiene en el tiempo una relación



Cliente - Abogado (entre la reclamante y el reclamado) precisamente para la realización del encargo profesional cual era interponer una querrela criminal por el delito de estafa. Así las cosas, este Tribunal no puede menos que reconocer que tanto el contenido como la naturaleza de la acción penal deducida importan obtener del cliente (hoy reclamante) una serie de antecedentes e información relevante y necesaria a los efectos del encargo, que habiéndose acreditado fehacientemente que existía y que se materializó, importó también el cumplimiento de los deberes de honor y dignidad de la profesión, lealtad y honradez al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 3° y 5° del Código de Ética Profesional.

Del mismo modo, este Tribunal ha ponderado que la prueba documental referida es también directa y eficiente permitiendo a través de ella, acreditar las fechas y la serie de actuaciones que sustentan las infracciones del abogado reclamado, quien en ese estado de cosas, consta que se ha desentendido de lo dispuesto en el artículo 7° al desconocer que *“la confidencialidad debida se extiende a toda la información relativa a los asuntos del cliente que el abogado ha conocido en el ejercicio de su profesión”* y del artículo 85° que dispone que *“El abogado no puede intervenir en un asunto en favor de los intereses de un cliente, si estos son directamente adversos a los intereses de otro cliente anterior del mismo abogado o del estudio profesional y existe además el riesgo de que la confidencialidad de las informaciones obtenidas del anterior cliente pueda ser infringida o tales afirmaciones pudieren permitir al nuevo cliente la obtención de una ventaja indebida”*.

En efecto, este Tribunal ha ponderado que los contenidos de la prueba documental signada con el número 4 a saber escrito de renuncia al patrocinio y poder en la causa criminal de fecha 21 de Junio de 2012, así como la prueba signada con el número 5 a saber, el acta de conciliación, del 23 de julio de 2012 y la del numeral 6 esto es el registro de la causa laboral RITT-XX-2012, RUC XX-8, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, procedimiento Tutela caratulada “XX con XX”, son determinantes y directas ya no sólo por las fechas en que se realizaron las actuaciones profesionales de que se da cuenta en cada caso sino también porque al ponderar sus contenidos y consecuencias, ellos confrontan las pretensiones de ambas clientes, que precisamente por lo exiguo de los plazos comprometidos tanto en



la renuncia por una parte como en el nuevo patrocinio por la otra, descartan un olvido o un descuido al asumir la nueva contratación, que así instalada resultó funcional y del todo contraria a las disposiciones citadas y en desmedro de la reclamante doña XX.

La vinculación previa entre doña XX y doña XX no podía ser desconocida por el profesional primero querellante criminal y luego demandante laboral, así como tampoco podría asilarse en la presentación de renuncia al patrocinio y poder que fue presentada en la causa criminal, por cuanto aquella no sólo no lo liberaba, muy por el contrario lo comprometía en los términos dispuestos por el artículo 85° en las condiciones que se viene razonando.

Atendido los hechos acreditados y ponderando prueba documental signada en el numeral 4, este Tribunal no comparte la imputación sostenida por la instructora en relación a una infracción al artículo 22° del Código de Ética desde que no se dan en los hechos los supuestos de la misma. En otras palabras, el abogado reclamado y desde los hechos acreditados no mantuvo su relación profesional con la reclamante, ya que precisamente concluyó aquella- con la presentación del renuncia al patrocinio y poder- para días más tarde asumir la representación de doña XX en la causa laboral en directa confrontación con su “cliente anterior”, la que en ese estado de cosas y de la forma en que se viene razonando se vio perjudicada por el actuar contrario a la ética del profesional reclamado que precisamente incurrió en las conductas descritas y sancionadas en los artículos 7° y 85° del Código de ética, de la forma en que se ha acreditado

- 9) En mérito de lo expuesto, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 13°, 16°, 17° y 18° del reglamento disciplinario,

SE RESUELVE, acoger la acusación sostenida por la abogado Instructora del Colegio de Abogados AG. y condenar al abogado colegiado don XX, por los hechos imputados, los que en opinión del Tribunal constituyen faltas a la ética expresamente previstas y sancionadas en los artículos 7° y 85° del Código respectivo, imponiendo la sanción de AMONESTACION POR ESCRITO, con publicación en la revista gremial.

La decisión es adoptada por unanimidad. Juez redactor, doña María Gabriela Zúñiga Calderón.



Notifíquese a las partes por correo electrónico o, en subsidio, por carta certificada.

NPR: 91/12

Santiago, 13 de abril de 2015.

Cristian Maturana Miquel

Gerardo Varela Alfonso

María Gabriela Zúñiga Calderón